

Cuenta política - administrativa del Presidente del Partido Demócrata Cristiano Jaime Castillo V. a la Junta Nacional.

Agosto de 1968.

Camaradas:

Damos cuenta hoy de una gestión política que cubre poco más de seis meses ple-tóricos de acontecimientos, inquietudes, dificultades, pero también sazonados con varios momentos de intenso regocijo partidario. A pesar de la dureza de la tarea cumplida, nos parece que el saldo es favorable. Estamos en situación de visualizar el futuro de manera suficientemente clara y de reunir a tiempo todas nuestras fuerzas. En un grado eminente, depende de nosotros mismos que nuestra experiencia, comenzada en 1964, prosiga con un ritmo más veloz y una amplitud mayor.

Será necesario desarrollar aquí un inventario de nuestros problemas del momento. Añadiremos también algunas observaciones sobre la perspectiva que abre para nuestro partido la situación política actual.

I

PEÑAFLORES Y EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO MANDATO

A.—El mandato de la actual mesa directiva emana de la última Junta Nacional, celebrada en Peñaflores. Cada uno de Uds. recuerda que ella tuvo lugar en circunstancias críticas. Un grupo de delegados creyó necesario solicitar al Presidente Nacional de entonces, camarada Rafael A. Gumucio, la convocación de la Junta, a fin de analizar el hecho de una peligrosa diferencia de opiniones surgidas entre el Presidente de la República y la Directiva Nacional del Partido. No puedo aquí, ni es justo que lo haga, analizar de nuevo las causas de tal situación. Cábeme solamente, y para los efectos de explicar la actitud de esta Directiva, recordar que el motivo inmediato para la celebración de dicha Junta Nacional fue el Proyecto de Ley de Reajuste, sobre el cual se mantenía una discrepancia entre el Ejecutivo y el Partido que se arrastraba más de lo conveniente para el país y para la Democracia Cristiana. Detrás de esta diferencia de opinión, había, sin duda, otros problemas que se refieren a ciertos aspectos ideológicos, políticos y programáticos, pero que, en verdad, no parecían explícitos ni claros ante los militantes. En resumen, creemos poder sintetizar las cuestiones,

planteadas ante la Junta, de la manera que sigue:

1.—Un problema inmediato relativo a las cláusulas del Proyecto de Reajustes, especialmente las disposiciones acerca del derecho de huelga y ciertas condiciones de funcionamiento del Fondo de Capitalización.

2.—Un problema metodológico referente a la manera como resol-

ver en el futuro y, en el caso presente, las discrepancias de esa clase.

3.—Un problema político suscitado por el choque entre el Presidente y la Directiva Nacional, que hacía aparecer, ante el país y ante los militantes, una pugna sobre quien debía ser el conductor de la experiencia demócrata cristiana: el Gobierno o el Partido.

Para superar los desacuerdos

Las tres cuestiones fueron resueltas a través de dos votos: uno sobre el derecho de huelga y otro sobre el debate en general. Este último, el voto propiamente político y que determinó la renuncia de los camaradas miembros de la Mesa, dice lo siguiente:

"Declarar que reafirma la política de "acción concertada" que acordó el Segundo Congreso Nacional, expresando que ella no puede entrañar el riesgo de que la gestión gubernativa se paralice cada vez que hay desacuerdo entre el Partido y el Gobierno. En tales casos el Presidente de la República tiene derecho a adoptar

las decisiones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y dentro del marco del programa. El Partido, a su vez, tiene siempre derecho a retirar su colaboración al Gobierno, cuando crea gravemente lesionada su doctrina o el programa. Esta solución se impone porque sobre el Presidente pesa principalmente la responsabilidad de gobernar al país y de conducir al éxito la Revolución en Libertad, por lo cual tiene derecho a graduar los pasos según las posibilidades y le corresponde una participación preponderante en la definición de las metas de Gobierno y en la elec-

ción de los medios para alcanzarlas, y al Partido corresponde la responsabilidad de resguardar la integridad doctrinaria y la continuidad del movimiento".

A su vez, el acuerdo sobre el derecho de huelga es del siguiente tenor:

"La Junta resuelve especialmente reafirmar la necesidad de resguardar en su integridad el derecho a petición y huelga de los trabajadores en la próxima ley de reajustes".

Ahora bien, si analizamos estos documentos y recordamos el debate habido en la Junta, llegaremos a la conclusión de que instruí al Consejo Nacional para proceder de esta manera.

En primer término manifestaba la necesidad absoluta de terminar la pugna entre el Ejecutivo y la Mesa del Partido.

En segundo, establecía un procedimiento más concreto para solu-

cionar cualquiera posible divergencia futura, dentro de las premisas ya formuladas por el II Congreso Nacional. Este consistía en tres puntos: a) amplia búsqueda de un acuerdo entre el Gobierno y el Partido; b) primacía para el Jefe del Estado, en última instancia, en los asuntos de su responsabilidad inexcusable ante el país; c) primacía para el Partido en las cuestiones que se refieren a la doctrina y a la perspectiva política de nuestra colectividad.

Una Convocatoria a la Junta Nacional del PDC.

Por fin, la resolución ordenaba al Partido y a los camaradas, que representan al Ejecutivo, ponerse de acuerdo sobre el proyecto de reajustes.

B.—Ante una situación semejante, la Mesa Directiva presidida por Rafael A. Gumucio creyó de su deber presentar la renuncia a sus cargos. En seguida, fueron elegidos los integrantes de la Mesa actual.

Tenemos la necesidad de expresar, ante Uds., la forma cómo hemos cumplido los acuerdos de la Junta Nacional.

Antes de ello, dos observaciones breves:

Se ha dicho por elementos extraños a nuestro Partido, y aún por camaradas, que la Junta Nacional anterior funcionó bajo una presión ilícita, agravada por la participación del Presidente de la República en el debate mismo.

Sin querer renovar la polémica, creemos necesario dejar constancia de nuestro punto de vista. La convocación a dicha Junta fue legítima. El camarada Frei, miembro de la Junta Nacional por derecho propio, fue invitado para concurrir y participar en ella. Agregamos más: la opinión de que la presencia del Jefe del Estado importaba ejercer alguna forma de presión sobre el Partido, corresponde a un concepto de ruptura entre el Gobierno y aquél. Dentro del clima de acción concertada, la participación del Presidente, —en caso determinado— de los Ministros, de ciertos funcionarios es, no sólo legítimo, sino deseable. El Partido necesita y constantemente reclama la presencia de los que gobiernan dentro de sus reuniones. Por último, hemos de decir que la intervención del Presidente, en un caso extremo y cuando en conciencia cree tener que venir al Partido, es un reconocimiento al hecho de que, en última instancia, está también sometido a la autoridad de ésta. Concordemos, a este respecto, con las palabras dichas por el entonces Presidente Nacional de la Juventud: "El Partido es la única instancia válida" (Rodrigo Ambrosio, "El Mercurio", 10 de Enero). En un caso como el que hubimos de afrontar, proceder de otro modo habría significado que el camarada Frei quería imponerse al Partido desde fuera, como un poder extraño. Eso, sí, sería inaceptable. Otro punto más. A raíz de la Junta de Peñaflo, se observó toda una vasta campaña de sectores contrarios al Partido y al Gobierno, especialmente de origen frapista, pero con algún acompañamiento de Derecha, en el sentido de que la Mesa Directiva Nacional no representaba nada dentro del Partido, estaba compuesta sólo por dirigentes dóciles a la voluntad de La Moneda y, al decir de un diario, enconado adversario nuestro, ella disponía del "más débil de los mandatos" ("Última Hora", 7 de Enero). Por eso mismo, ha sido doloroso para los miembros de la Mesa observar que algunos camaradas hayan insistido en esos conceptos, a pesar de la resolución oficial de la Junta.

El principio de la acción concertada

A este respecto, debemos decir que el texto político de la Junta y cuya aprobación es el origen de nuestra autoridad, coincide exactamente con los conceptos emitidos por el Presidente Nacional anterior, camarada Rafael A. Gumucio, en su cuenta de aquella reunión. En efecto, en ella se lee lo siguiente:

"El problema debe resolverse sobre la base del principio de las diversas funciones que a cada cual corresponden y de la acción concertada. Esto significa que, en casos de discrepancias que no hayan podido ser resueltas, procede en primer lugar, que uno y otro, Partido y Gobierno, respeten mutuamente sus respectivas opiniones, con lo que se crean condiciones favorables para encontrar la solución. En tanto ello aún no sea posible, debe abstenerse,

tanto el Partido como el Gobierno, de exacerbar en cualquiera forma tales diferencias. Desde el punto de vista de las decisiones y de la acción, mientras las diferencias subsistan, el Gobierno procederá conforme a las prerrogativas que la Constitución y la ley le otorgan y, a su vez, el Partido procederá conforme a las prerrogativas que sus Estatutos confieren a sus Directivas".

Estamos plenamente de acuerdo con estas palabras. El voto político aprobado por esta Junta no hace más que confirmar y llevar a sus últimas consecuencias el mismo principio: cuando las prerrogativas constitucionales, y la conciencia que el Presidente tenga de ellas, lo impulsan a sostener una tesis en que el Partido no está de acuerdo, éste último, por propia decisión, hará confianza en la competencia, el sentido doctrinario y el patriotismo del camarada que

preside la República; pero, en cambio, éste, en su calidad de militante, reconocerá al Partido el derecho a tomar posiciones y mandar, incluso sobre él, cuando se trata específicamente de una cuestión doctrinaria o de interés permanente del Partido.

¿De qué manera nuestra Directiva ha cumplido con las disposiciones de la resolución antes citada?

Desde luego, nunca hubo necesidad de aplicar el acuerdo de Peñaflor en la parte en que favorece al Presidente. Todas las cuestiones suscitadas fueron objeto de conversación entre el Gobierno y el Partido. Las diferencias no llegaron jamás al grado de

una ruptura que hiciese necesaria la aplicación de la cláusula pertinente.

Quizás la materia más difícil, a este respecto, surgió con motivo del artículo 66 del Proyecto de Ley de Reajustes. El asunto fue encargado a una Comisión formada por Andrés Zaldívar, como representante del Gobierno, Tomás Reyes, en representación del Consejo Nacional y Luis Maira. El texto que se incorporó como substitutivo del artículo 66 primitivo fue, por tanto, el fruto de una conversación a nivel de Partido y de Gobierno.

Conformarse a los Estatutos del Partido

Otro de los temas capitales controvertido era el proyecto de reforma de la educación superior, en el cual el Gobierno mantenía un punto de vista en discrepancia con el Partido respecto al derecho de los alumnos a participar en la designación de autoridades universitarias. El Partido sostuvo la tesis de que no era aceptable establecer una disposición prohibitiva en la ley. El Gobierno, por su parte, fundó sus argumentos en contrario. El asunto alcanzó cierta resonancia en la opinión pública. A pesar de ello, y cuando se advirtió que no habría posibilidad de acuerdo, el Presidente de la República manifestó que, en un tema como éste, él no podía ir contra la opinión del Partido. Ello significaba la renuncia de un Ministro, como el señor Gómez Millas, que había prestado valiosísimos servicios al país y al Gobierno. Más tarde, los acontecimientos mostraron que la tesis del Partido respondía mejor a la situación y fue incorporado al proyecto sobre la educación superior.

De este modo quedaron solucionados los dos problemas concretos más graves entre el camarada Frei y la Directiva Nacional anterior, dentro de un plazo brevísimo. Naturalmente, jamás hemos caído en la tentación de colocarnos en una trinchera extraña al Gobierno o a sus representantes. Por el contrario, los problemas fueron siempre tratados desde dentro con franqueza y amistad. Cada una de las gestiones posteriores o resoluciones de Gobierno fueron conocidas por la Mesa y llevadas al Consejo Nacional. A veces, sin duda, por razones de apremios materiales, como la redacción del segundo proyecto de reajustes, el Consejo Nacional tomó conocimiento

con alguna precipitación, pero es justo agregar que los Ministros de Hacienda y Economía hicieron amplias exposiciones y recibieron la opinión de los consejeros, simultáneamente con la redacción misma del texto.

De este modo, y con inevitables fallas humanas de una y otra parte, hemos mantenido la estrecha colaboración con el Gobierno, acordada por la Junta Nacional y dado cumplimiento sin desdoro alguno para el Partido, a una resolución oficial que señale un procedimiento acertado para solucionar en el futuro cualquiera discrepancia. Con buena voluntad y propósito de ayuda recíproca, no habría necesidad ni siquiera de recurrir jamás a él.

La Mesa Directiva y el Consejo Nacional puede tener la satisfacción de haber terminado con un permanente tema de ataque político contra el Gobierno y el Partido. Nadie suscita ya las divergencias entre uno y otro, y hasta la imaginaria docilidad de la Directiva comienza a perder su actualidad entre ciertos adversarios de nuestra causa. Por nuestra parte, pensamos que no tenemos sino que aplicar la resolución del II Congreso Nacional que obliga a todos los militantes a trabajar concertadamente en las tareas que el Partido se impone.

C.—Esta Directiva estuvo siempre muy consciente de las circunstancias en que había sido elegida. Creímos que era necesario impedir la prosecución de un ambiente de distancia entre el Ejecutivo y el Partido. Pero, al mismo tiempo, sabíamos que una dura controversia interna amenazaba con destruir la unidad de éste. Al asumir la dirección teníamos que

enfrentar ese problema. Y ello significaba tanto mantener la decisiones acordadas como restablecer el espíritu de concordia entre los camaradas. La Directiva Nacional no replanteó los problemas suscitados ni recogió las acusaciones formuladas durante o después de la Junta de Peñaflor. Evitó hacer cualquier tipo de proselitismo interno y llamó la atención hacia los deberes comunes a todos los militantes. Tampoco negó el derecho a las discrepancias, bajo la sola condición de que cada uno se conformara a los Estatutos del Partido y procediera de acuerdo con las mismas normas que se hacen valer a los demás cuando el que hoy discrepa tiene la autoridad en sus manos.

Dentro de este criterio, la Mesa tuvo muchas oportunidades de aplicar legítimamente sanciones disciplinarias. No lo hizo. Prefirió expresar sus opiniones, conversar con los afectados, establecer y renovar los criterios generales.

El período inicial de nuestra gestión estuvo caracterizado por algunas consecuencias inmediatas del debate anterior y por toda clase de suposiciones emanadas de sectores políticos adversos. Con todo, creemos haber actuado con la perseverancia y el espíritu de camaradería que declaran nuestros principios. Por cierto, no solicitamos para esta opinión la unanimidad. Pero, creemos que los hechos prueban suficientemente la circunstancia de que, a excepción de algunos hechos a que me referiré más adelante, hubo en general una tendencia a apaciguar la discusión interna. Al menos, el partido no se prestó para el comentario de los enemigos. El tema de las divisiones, de los bandos y de los líderes de bandos dejó de aparecer en las páginas de la prensa y pudimos dar una campaña electoral, como la de Cautín, en plena unidad partidaria y con la solidaridad de todos los militantes.

II

EL CURSO DE LA POLITICA NACIONAL

A.—La participación del Partido en la labor del Gobierno

Los cuatro primeros meses posteriores a la Junta de Peñaflor fueron quizás el período más difícil para la Administración del Presidente Frei. Ellos corresponden a la lucha política y social en torno al proyecto de reajustes.

No hay duda que el Partido y el Gobierno cometieron serios errores en el planteamiento y la tra-

mitación de ambos proyectos de reajustes. Pero, este hecho no debe hacernos olvidar el marco inevitable que tales proposiciones debían encontrar. Un país sub-desarrollado como Chile, sometido a un fuerte proceso inflacionario, que vive no sólo bajo un sistema democrático, sino que aún prohija organizaciones políticas y sociales cuya finalidad es la de sobrepasar siempre las normas democráticas comunes; un país que no ha llegado aún a adquirir el más elevado concepto de una disciplina social, volcada hacia

el interés de la comunidad entera; un país en el cual los sectores más ricos poseen una gran capacidad para desalentar los esfuerzos inspirados en los mejores intereses de la Patria, y en que las angustias y desigualdades tradicionales hacen imposible que un solo proyecto resuelva los problemas atrasados, no puede en verdad, por buena que sea la intención de los gobernantes, ofrecer un reajuste de remuneraciones que satisfaga a los trabajadores. Sabemos que el actual Gobierno había intentado desde el primer año, alterar de modo fundamental la situación anterior. Así y todo, era poco para el cúmulo de necesidades que afectan a las masas. Eso trajo un resultado que el Presidente expresó así el lunes 21 de Diciembre a la opinión pública:

"Cuando subí al Gobierno dije que estimaba que el reajuste debía ser de un ciento por ciento del alza del costo de la vida. Pues bien, ese objetivo no se ha conseguido. Las alzas de sueldos y salarios han sido superiores a los índices del alza del costo de la vida. Durante estos años, ha sido imposible que se comprenda que un alza superior al ciento por ciento del alza del costo de la vida nos impide detener la inflación".

Durante dos años, 1965 y 1966, agrega el Presidente, luchó por convencer a los organismos sindicales y a los propios patrones de la necesidad de no apartarse de las normas señaladas en cuanto a reajustes, limitados éstos al 100% del alza del índice. No fue escuchado. En 1967, hubo necesidad de plantearse un dilema: otorgar sólo los reajustes ordinarios para el sector privado, y mantener la libertad de negociaciones colectivas; o limitar la negociación colectiva, dando reajustes mayores. Para no tocar el derecho de huelga, se optó por el primer camino: autorizar el reajuste de un 100% a los trabajadores del sector privado. Una vez más las peticiones y soluciones de conflictos sobrepasaron largamente la cifra máxima prevista. De esta manera, el proyecto de reajuste para 1968 iba a representar una enorme dificultad. El Gobierno quiso encarar con rígida determinación el problema y propuso una fórmula que contenía la limitación de las negociaciones colectivas. Decía el Presidente:

"Lo que estoy proponiendo es que el 5% que, adicionalmente a los reajustes, el país podría otorgar, si realiza un intenso esfuerzo de desarrollo, en lugar de dejarlo entregado al manejo de la negociación colectiva, donde sólo lo aprovechan y lo exceden algunos sectores muy poderosos, se entrega y se reparte, en proporción a sus salarios y sueldos, a todos los trabajadores de Chile".

Aquel Proyecto de Capitalización

Tal es el fundamento que el Gobierno atribuye al artículo 66, objeto de tantas controversias. El Ejecutivo no pretendía suprimir el derecho de huelga, sino reglamentarlo, para el fin de "planificar el reajuste". Al operar así, creía estar ateniéndose a la visión del interés común en una circunstancia histórica concreta. Al mismo tiempo, añadía, el mecanismo de dicho reajuste, la idea de un Fondo de Capitalización en manos de los trabajadores y del Estado. De golpe y porrazo, el proyecto adquiría un

aspecto muy interesante para el surgimiento de una economía comunitaria, no capitalista y no colectivista.

Esta era, sin embargo, la base para el rechazo completo del proyecto tanto en la Derecha, como en la Izquierda y en el Centro. Los partidos de oposición se confabularon literalmente contra el Gobierno. Para ellos, el proyecto representaba un poder económico que el Gobierno iba a administrar políticamente. Los partidos de Derecha centraron su esfuerzo en la lucha contra el Fondo de Capitalización. Los de Izquierda además, sobre la limitación de las negociaciones colectivas más allá del 15% del reajuste pagado en dinero. Ellos, en verdad, no tenían razón para insistir en este punto, según se comprueba a poco que analicemos las experiencias socialistas contemporáneas en materia de ahorro obligatorio y de supresión del derecho de huelga. Pero, tales cosas no se dan a conocer por ellos en nuestro país. El proyecto de reajustes estaba pues, mal en el Parlamento y, en parte de la opinión pública. La larga discusión entre el Gobierno y el Partido agotó sus posibilidades. A última hora, y ante la cerrada, curiosa y dogmática actitud de los opositores, debió ser retirado. El Gobierno y la Directiva estimaron necesario hacerlo a fin de replantear las cosas en términos menos duros y con un proyecto nuevo, más tradicional, pero, por lo mismo, más fácil de hacerlo pasar.

Algunos camaradas han sostenido que ellos tuvieron razón cuando afirmaron que este proyecto carecía de opción en el Senado y que jamás debió plantearse en los términos convenidos. Dicha opinión resultó, sin duda, acertada. El problema es el de saber si era posible partir de un proyecto inicial inflacionario y evitar más tarde la crítica de que el Gobierno actuaba con una negligencia abismante en el problema esencial del momento, o sea, la inflación.

Partidos Políticos pro-golpe

9.—De todos modos, y sin importar ya la parte de error en que cada uno cayó, nos parece útil retener la lección. Quizás sea sugestivo que los gobernantes nos demuestren la medida en que la ausencia del artículo 66 ha influido en la presión inflacionaria posterior a la aprobación de la ley de reajuste. Un dato cierto sobre la materia tendría importancia para el futuro.

De hecho, sin embargo el retiro del Proyecto de Reajustes trajo graves consecuencias.

El Presidente creyó del caso hacer una reestructuración de su gabinete. Edmundo Pérez fue nombrado Ministerio del Interior subrogante, Andrés Zaldívar pasó a la cartera de Economía, y Raúl Sáez se hizo cargo del Ministerio de Hacienda, amén de los cambios en las carteras de Justicia, Trabajo y Obras Públicas. Fue la más importante reestructuración de su equipo hecha por el Presidente Frei. Ello tenía significado político y económico. La presencia de Edmundo Pérez y de Raúl Sáez podía ser interpretada como una especie de retroceso, en lo social, y de mayor dureza, en lo político. Así se especuló ampliamente dentro y fuera del Partido.

Por nuestra parte y sin abandonar en ningún momento la libertad de crítica, atribuímos los cambios, no al pesimismo ni al deseo de retroceder en el pro-

grama, sino a necesidades impuestas por la situación. A nuestro juicio, el Gobierno y el Partido tienen derecho a hacer el inventario de su marcha, solidificar lo conquistado y reprogramar los pasos que deben darse en el futuro. Eso se refiere tanto a la decisión de hacer más rápido el avance, como a la de hacerlo más pausado. Lo único importante es saber diagnosticar la situación actual y prevenir las que vendrán. Nos parecía que el Gobierno no podría ser presionado por el Partido en un momento crítico. Por lo demás el Ministerio Pérez-Sáez empezó una etapa de activa consulta a los sectores de oposición. Es verdad que el nuevo proyecto de reajuste tampoco fue aceptado. Hubo necesidad de realizar algunas modificaciones, especialmente la supresión del artículo 66, solicitado por el Partido Comunista y tramitado por el senador Tarud. Cualquiera que sean las vacilaciones y equivocaciones, sufridas por el Gobierno y el Partido, el paso de Raúl Sáez por el Ministerio de Hacienda no significó la toma de ninguna medida que más tarde haya sido reprobada por el Partido. Su sucesor, el camarada Andrés Zaldívar, que sin duda, se ha ganado el aplauso más sincero de todos los militantes, por la brillantez de su actuación como Ministro en esta difícilísima coyuntura, actúa dentro de los criterios impuestos por la situación. En efecto, se están haciendo importantes sacrificios en el orden de las inversiones sociales y de las reformas de estructura, pero nadie puede sostener que ello es con criterio de retroceso social o dirigido especialmente

a los sectores donde el avance era más notorio, como la reforma agraria, por ejemplo.

El Partido aprobó también los criterios del Presidente de la República para designar en la cartera de Defensa Nacional, al General Tulio Marambio, pasando Juan de Dios Carmona a servir el Ministerio de Economía. Los motivos de esta determinación son conocidos. Amenazas de orden institucional se dibujaron, sin alcanzar a tomar forma, y sin que ellas estuviesen dirigidas propiamente contra el Gobierno. Algunos Partidos de oposición, como el Comunista, dieron su apoyo al Ejecutivo en esta emergencia; otros, en cambio, se manifestaron indiferentes o aún favorables a un posible golpe. De hecho, la ciudadanía no dio respaldo a tales posibilidades y la normalidad volvió rápidamente al país.

A raíz de estos mismos acontecimientos, la Directiva Nacional invitó a los militantes de los distritos de Santiago para escuchar una exposición y solicitó su adhesión al Gobierno y al Partido. Una buena concurrencia asistió al patio interno de nuestra vieja casa. Pocos días después, con motivo de la ceremonia del 21 de mayo, pedimos a los militantes que saliesen a la calle para saludar al Presidente y su Gabinete, y para protegerlo, si fuere necesario, contra posible atentado o manifestaciones anunciadas. El éxito fue completo. El Presidente hizo su recorrido tradicional en medio de los aplausos y el entusiasmo de una gran multitud. Las manifestaciones hostiles desaparecieron.

EL PARTIDO Y LOS ULTIMOS CONFLICTOS SOCIALES

Como consecuencia de los proyectos de reajustes, se produjeron una serie de dificultades en las cuales el Partido cooperó en la mejor forma posible, para encontrarles solución. Tres de estos problemas asumieron mayor gravedad; el de Correos y Telégrafos, el del Magisterio y el de LAN.

El primero de ellos fue atendido personalmente por el Vicepresidente Nacional Fernando Sanhueza, quien trabajando en estrecha armonía con el Ministro del Interior y el Director General de Correos, pudo encontrar una fórmula satisfactoria. Los otros dos conflictos correspondieron al Presidente Nacional y también lograron solución mediante la buena voluntad y colaboración de las respectivas autoridades.

Conviene formular algunas reflexiones sobre estos casos.

En primer lugar, los conflictos representan, en general, aspiraciones que son fundadas, desde el punto de vista de las necesidades de los trabajadores, y, por lo tanto, aparecen como del todo justas; pero, al mismo tiempo ellas se colocan siempre fuera del marco de cualquier política anti inflacionaria que pudiera suscitar el Gobierno. Cada gremio parte de sus necesidades o de injusticias tradicionales, y usa la huelga como un recurso ante el cual las autoridades tienen que ceder, so pena de colocarse contra el interés de los trabajadores. La solidaridad gremial en relación con una especie de bien común de la sociedad o aún con las desigualdades entre ellos mismos, casi no existe. Esto aumenta las dificultades de solución, pues los dirigentes miran mucho más el monto inicial de las peticiones que la situación concreta.

Diremos, en segundo lugar, que la intervención de organizaciones como la CUT y la ANEF es variable de acuerdo con las circunstancias, los intereses políticos comprometidos y el caso de que se trata. Nuestra experiencia a este respecto no es negativa, sin perjuicio de comprobar una vez más que dichas organizaciones actúan siempre muy relacionadas a partidos políticos y, por tanto, con tendencias anti-gobiernistas. Creemos que, durante estos seis meses, ha sido posible mejorar bastante las relaciones de convivencia entre el Gobierno y dichos sectores, cosa que, naturalmente, debemos mirar como un factor beneficioso para el país. En cuanto al Partido, ha trabajado cuantas veces ha sido necesario con esas organizaciones en un ambiente de cordialidad.

El punto más importante para nosotros es el que se refiere a la situación de los dirigentes y militantes demócrata cristianos afectados por los conflictos. El mayor mal que hemos comprobado es el de su desunión. Esta directiva comprende el drama entre la lealtad a la mayoría gremial y la lealtad a las posiciones del Partido o del Gobierno. Por este motivo no hemos querido impulsar disciplinariamente a los militantes para adoptar una actitud determinada. Esto podría solucionarse en el curso mismo del conflicto si hubiese amistad y compañerismo. Por desgracia, a veces tal factor no existe. La intervención del Partido, por tanto, se hace doblemente difícil: por una parte, debe ayudar a resolver un conflicto, sin menoscabar la autoridad del Gobierno; por otra, tiene la obligación de apoyar a los militantes conscientemente leales, sin, por eso, proceder a forzar el

pensamiento de quienes creen justo un movimiento determinado.

La única solución real para esta clase de problemas descansa en la mayor solidez de nuestra organización gremial y la mayor unidad entre el Partido, los militantes sindicales y el Gobierno. Entre tanto,

las Directivas Nacionales y Provinciales deben hacer acopio de diligencia, comprensión y sentido de la equidad para resolver los casos de antagonismo, evitando perjuicios al Gobierno y manteniendo la imagen solidaria del Partido y de sus militantes sindicales.

III

LA SITUACION POLITICA

El Partido tiene una posición política que es un hecho macizo. Somos los sostenedores del Gobierno del Presidente Frei, elegido por el esfuerzo de nuestra colectividad y de cientos de miles de simpatizantes o adherentes, en Septiembre de 1964. Nuestro último Congreso Nacional ratificó esta tesis y nos dio el mandato de trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno. Las Juntas Nacionales de Peñafiel han vuelto a presuponer una actitud que es obvia para nosotros y para el país entero.

Hoy día contamos con un aliado: el Partido Democrático Nacional. El pacto de alianza fue suscrito por la Directiva del camarada Gumucio, pero nosotros hemos manifestado nuestra conformidad con él y lo hemos aplicado en amistosa colaboración, pidiendo a veces a nuestros militantes sacrificios de buenas expectativas de carácter local. Lo hicimos porque pensamos que una actitud de apertura hacia quienes se unen a nuestra causa fundamental de hacer una revolución en libertad es políticamente positiva. Creemos que es necesario mantener y desarrollar esta línea.

Pero más allá, nuestro Partido no tiene, ni de hecho puede tener en este momento otra alianza. Las fuerzas de Derecha han objetado drásticamente el programa del Presidente Frei y la forma como está siendo aplicado. El Partido Radical trata de mostrar el máximo grado de hostilidad a todo lo que proviene de nuestro Gobierno. Los partidos del Frap, especialmente el Socialista, parecen fundar toda su batalla en la voluntad de causar el mayor mal posible a la experiencia "reformista", como ellos dicen, de la Democracia Cristiana. Solamente el Partido Comunista, obligado por su mayor realismo político, procede a veces de un modo objetivo y obstaculiza menos las medidas del Gobierno. Con todo, el Frap,

Mas, esta conclusión, a nuestro juicio, nada tiene que ver con la formulación de una política de alianzas que pudiera plantearse desde ahora con vistas a la campaña presidencial. Nos parece que hoy por hoy, la cosa es demasiado clara para ser puesta en duda. Formamos parte del Gobierno y estamos directamente ligados a él.

Se nos juzgará por lo que hagamos como Partido de Gobierno y no como Partido de oposición. En consecuencia, nos parece absolutamente negativo cualquier planteamiento que signifique desolidarizarse o "desengancharse" de la tarea de gobernar. Propiciar una utópica separación entre el Partido Demócrata Cristiano y el Gobierno del Presidente Frei, sobre la base de dejar a éste administrar el país, sin comprometerse en ello, para buscar desde ya un nuevo frente o forma de acción política es, a nuestro juicio, una tesis sin ninguna

realidad y ajena a la mente del ciudadano común. El problema no consiste en separarse, sino en adentrarse más por la vía de la identificación con las tareas que surgen de la acción del Ejecutivo. Debemos pues terminar nuestra tarea como partido de Gobierno y apoyar en ella la campaña de 1969 y la presidencial de 1970. Afianzar, prolongar y replantear, para la nueva etapa, la labor del actual Gobierno es la única forma cómo la revolución en libertad puede seguir su marcha hacia adelante.

No queremos aquí examinar en forma muy especial la tesis de un frente revolucionario, propiciada por algunos dentro del Partido y que descansa justamente en ese "desenganche" de que hablamos con anterioridad. La verdad es, a nuestro juicio, que ella sólo puede tener una posibilidad de verse concretada si previamente colocamos a nuestro Partido como una plataforma subs-

como bloque, más el Partido Socialista Popular y las fracciones que dependen o derivan de esa alianza —especialmente los castristas— explotan una imagen incompatible con el Gobierno Demócrata Cristiano.

Bajo la directiva de Patricio Aylwin se aprobó una declaración, a raíz de las elecciones municipales de 1967, en que se formulaba la necesidad de establecer puntos de convergencia con las fuerzas que estuvieran dispuestas a apoyar aspectos del programa de Gobierno. Este llamado fue el centro de la campaña a senador por las provincias de O'Higgins y Colchagua y también fue utilizado con amplitud por la directiva del camarada Gumucio. Podemos decir que no ha habido interés en darle acogida, a pesar de declaraciones que suelen provenir del Partido Comunista. Pero, a veces, ha dado frutos. Creemos que la política de diálogo del Ministro Sáez, apoyada por el Partido, tuvo su primera base en la Declaración de Las Vertientes y permitió más tarde el acuerdo sobre el proyecto de reajustes con los comunistas, los social demócratas y el senador independiente Sr. Tarud. Esta Directiva creyó necesario intercambiar opiniones con los dirigentes del PC sobre varios puntos de interés que quizá pueden renovarse con el exclusivo objeto de favorecer el despacho de determinados proyectos. La misma tramitación del proyecto de reajustes dio lugar a acuerdos con el Partido Nacional que también facilitaron su aprobación.

Estimamos que la búsqueda de convergencias prácticas y la ampliación del diálogo con las fuerzas políticas, para reforzar las tesis programáticas del Gobierno, deben seguir siendo estimuladas, a pesar de algunos fracasos, con vistas al bienestar del pueblo. Tal línea no es patrimonio de bandos dentro del Partido.

tancial de ese reagrupamiento, y la obra del Gobierno como el punto de partida para futuras realizaciones. Si, en cambio, ella es diseñada en la forma de un escepticismo completo respecto de nuestro Gobierno o de nuestro Partido, tal frente revolucionario concluirá en uno de dos resultados: o una mera alianza de algunos militantes demócrata cristianos con los partidos del FRAP, bajo el dominio de éstos; o, una reunión inorgánica y sin éxito electoral de militantes no apoyados por ninguna colectividad y enfeudados a los mitos del castrismo. Estimamos que la presente etapa debe ser vivida en forma completa: como Partido de Gobierno del Presidente Frei debemos cumplir con nuestro deber. Este hecho es la única realidad que nos permitirá visualizar el futuro.

Durante este período, hemos tenido, momentos difíciles, debido a la impla-

cable enemistad de nuestros adversarios. Pero también hemos sabido desquitarnos. La victoria en Cautín, encarnada en la persona de nuestro camarada Sergio Merino, fue uno de esos momentos de regocijo de que hablaba al comienzo. Habíamos perdido la elección senatorial de Bío Bío, Cautín y Malleco, en gran

parte, porque no dimos la lucha en la mejor de las formas. En Cautín, los errores se enmendaron. Un Partido sólido apoyado por nuestros amigos del Padena, trabajando organizados y unitariamente, no sólo hizo Diputado a Merino, a quien saludamos cariñosamente esta tarde, sino que también destruyó

las ilusiones forjadas por los centros de dirección de los partidos opositores, los cuales pretendían sentar la tesis infalible de que la Democracia Cristiana no podía ya obtener victorias electorales. Agradecemos una vez más a los forjadores de este nuevo triunfo.

El panorama futuro se presenta como una labor que concierne al Partido de la Democracia Cristiana, como fuerza de gobierno, en plena labor de transformación social de Chile. El resultado electoral de 1969 será decisivo para el planteamiento de la campaña presidencial. Creemos no contradecir a ningún militante cuando afirmamos que oportunamente designaremos un candidato de nuestras filas para dar también esa lucha. El asunto aún no está en tabla, pero es bueno, nos parece, señalar de antemano que el Partido Demócrata Cristiano estará representado allí por uno de los suyos.

No es fácil saber lo que pase en los demás partidos. El Nacional juega hoy a una sola carta: el desprestigiar la obra del Gobierno Demócrata Cristiano, a fin de paralizar sus reformas. Con ese objeto, no podrá sino recurrir otra vez al personalismo como fórmula de Gobierno. Sus ventajas y desventajas ya quedaron bien esclarecidas en el período presidencial anterior. Una candidatura derechista encontrará, nos parece, un país que ha cambiado y que no permitirá ser reducido a la situación de 1958, cuando la organización popular y la incorporación de las grandes masas a la economía nacional estaban muy lejos del punto a que ha llegado ahora.

En los partidos del FRAP, el proceso de división y desacuerdo es muy acentuado. No vemos para ese bloque ni una salida de vía pacífica ni otra de vía violenta. Por el momento, basta con advertir que el Partido Socialista del senador Allende, —así es como hay que mencionarlo— parece inclinarse a una posición "mirista", o sea castrista-guerrerista, cosa que anula precisamente a su líder, actual Presidente del Senado. El partido Socialista-Popular, por su parte, no se pronuncia sobre vía alguna, y el Partido Comunista mantiene su inmovible y conservadora línea pro soviética, dentro de un gran enigma sobre su propio destino. ¿Cómo formar un frente "antiimperialista" y "antioligárquico", con dos aliados que difícilmente podrían unirse, el Partido Radical y el Partido Socialista? ¿Cómo poder edificar una plataforma chilena después de ver destruidas una a una todas las perspectivas internacionales, al alejarse del castrismo guerrillero y observar cómo se agrieta el llamado mundo socialista?

El Partido Radical, por fin, parece agotar todos sus esfuerzos en la búsqueda de una resurrección imposible: el Frente Popular de 30 años atrás, y se aferra a esta idea olvidando el pasado y el presente, y cerrando los ojos ante el futuro. Pensemos que no basta imaginar que se tiene un "presidenciable" para solucionar favorablemente un problema de interpretación política y social tan complejo.

Tal parece ser la perspectiva abierta... Sin duda, mucho tenemos que hacer y pensar antes de adquirir la certeza de que nuestro país marchará por la senda que hemos podido trazar. Pero, está fuera de duda que ningún partido mirará el panorama con más optimismo que nosotros.

Debemos tocar aquí el problema de la violencia. Nuestro Partido es democrático y acepta la posibilidad

de realizar una transformación social dentro de las garantías que la Constitución ofrece a los ciudadanos. Sin desconocer toda la discusión sobre el problema de la violencia, tanto en sus fuentes cristianas como en los aportes modernos de las teorías socialistas, optamos por la libertad. Tenemos, sin duda, plena conciencia de los movimientos simplistas de la gente, la cual busca a veces, como segura salvación para males muy profundos, el uso de procedimientos autoritarios. Pero, no ha caído jamás en el error de dejarse llevar por algunos de esos afanes. Lo que el Partido pide al Gobierno, al respecto, es una actitud firme contra los desbordes y delitos, dentro de una aplicación integral de la ley.

Es necesario, sin embargo, anotar que la violencia forma parte de los métodos de algunos enemigos del Gobierno.

Hay desde luego elementos de tipo violento en variadas actitudes de extrema Derecha. La Reforma Agraria ha prácticamente trastornado el cerebro de muchos personeros de esa filiación. Su prédica contra la política de expropiación y la organización del campesinado no ha reducido jamás su hostilidad. Y, por lo que hemos visto, llega hasta el extremo de usar a los propios campesinos cuando, mediante golosinas de última hora, logran orientarlos contra la Reforma Agraria. Esos casos son excepcionales; pero, de todos modos, la ocurrencia de varios de ellos, como en Longotoma, por ejemplo, muestra, no tanto que hubo o no hubo razón para la protesta contra Cora, sino más bien que los personeros derechistas llegan a veces hasta a resistir a la autoridad y a la ley, (so pretexto de defender a los campesinos), pero, en verdad, con vistas a sostener la situación material de los latifundistas sobre terrenos que deben ser objeto de explotación agrícola más moderna y de más sentido social.

La otra forma de violencia es de origen político. Ella emana de las tesis sobre la violencia sostenida por algunos teóricos extranjeros, plagiados por políticos de acá sin mayor prudencia. El cuadro histórico no es chileno: comprende, en verdad, situaciones producidas en otros países de América Latina, que no conocen la vida democrática y son víctimas de oligarquías o dictaduras. Este hecho es ligado con la presencia del imperialismo, con lo cual se da una fisonomía legítima a la tesis y se la convierte en plataforma común de los partidos de izquierda. Ellos pueden, de esa manera, presentar su lucha antiimperialista sin necesidad de dar a conocer sus propias dependencias políticas e ideológicas respecto de centros de poder extranjeros. Todo este edificio es trasladado luego a la situación chilena. Se niega aquí el esfuerzo de transformación social en desarrollo, se reproducen los mismos lemas antiimperialistas, se obedece en todo a los dirigentes cubanos y se postula también una vía armada para Chile. Grupos salidos o expulsados del Partido Comunista, como el Mir, apoyados más tarde por el Partido Socialista, entran poco a poco en el ensayo de actos de terrorismo,

nás o menos intrascendentes al comienzo, pero que se ordenan poco a poco dentro de una táctica.

Llama la atención, en esta materia, el carácter intelectualista, minoritario y ajeno al pueblo, de tales actitudes. No obstante sabemos bien que es fácil provocar comentarios en torno a ellas. Es posible que eso halague la vanidad de alguna gente y que, cierto número de jóvenes, se preste para aventuras. Una

vez descubiertas, se quitará importancia al hecho en virtud de la misma juventud de los actores. Pero, la consigna de los adultos, que puede causar desgracias irreparables, seguirá en pie. En última instancia, debemos responsabilizar a éstos. El Partido, a nuestro juicio, ha de estar alerta contra un propósito que ha sido elaborado hasta en las aulas universitarias y que es recogido día a día por grupos políticos organizados.

IV

REFLEXIONES SOBRE EL PROGRAMA

Se ha formulado con insistencia en el curso de estos seis meses, la aserción de que la presente Directiva fue elegida con el propósito de cancelar la tesis de la vía no capitalista y permitir al Gobierno el regreso a una plataforma derechista y capitalista.

Tal especie proviene de sectores ajenos al partido, y adversarios suyos, pero, en verdad, encuentra su origen verdadero en argumentos emanados del Partido mismo.

Este hecho nos obliga a puntualizar algunos aspectos de la cuestión.

A nuestro juicio, el informe de la Comisión Político-Técnica es una moción aprobada en general por la primera Junta Nacional de Peñaflor y, por tanto, toda Directiva Nacional debe procurar que ella sea aplicada del modo más fiel posible. Por desgracia, dicha Comisión, a pesar de que contó entre sus miembros con algunos funcionarios de Gobierno, no incluía una representación oficial de éste. No era pues una forma de realizar el adecuado concierto entre el Partido y Gobierno. Mas, creemos que, en el fondo, el informe representa un modo de adecuar el programa a las circunstancias concretas del país. Es lógico que no se pueda imponer al Ejecutivo el texto literal de las proposiciones elaboradas. Era indispensable someter el documento al Gobierno, y, para sacar verdadero fruto, se hacía también necesario que el análisis fuese hecho con un criterio de estudio, no de polémica entre partes, y menos de debate entre el Presidente de la República y la Directiva Nacional.

Creemos que, en ello, hubo un error. Y de este error derivan otros. El Informe Político-Técnico, consistió para algunos, en una especie de bandera que diferenciaba a los militantes; más aún, su sola mención iba a ser la que definiera a los "avanzados" y a los "reaccionarios". El hecho de que la Junta Nacional aprobara en general por unanimidad el Informe y que más tarde se formularan observaciones de orden doctrinario o técnico, hizo nacer la interpretación de que algunos habían silenciado su resistencia al Informe para no verse descubiertos. En otras palabras, permaneció siempre el equívoco consistente en abrazarse a las interpretaciones ideológicas, en vez de estudiar concreta y seriamente los problemas.

La actual Directiva Nacional carece de prejuicios en esta materia. Ella cuenta a uno de los firmantes del Informe con su Primer Vice-Presidente. Además, está convencida de que el Partido Demócrata Cristiano es anticapitalista y debe impulsar, por tanto, en estos años, un desarrollo no capitalista. Creemos además que la revolución en libertad parte de un programa, elaborado en 1964, de acuerdo con las circunstancias y posibilidades de entonces. Tenemos el derecho a juzgar la situación tal como la encontramos y definir nuestro camino. Escogimos la democracia y no la dictadura. Escogimos la vía de la Reforma Agraria anti latifundista y la organización popular como base comunitaria de transformaciones; pero no nos pareció útil o posible, salvo circunstan-

cias enteramente nuevas, decretar la nacionalización de las riquezas chilenas en poder de capitales extranjeros. Asimismo, ese Programa no se plantea la colectivización como meta. En cambio, sí, contiene evidentemente la tesis, explícita o implícita, de que nuestros Gobiernos demócrata cristianos, desde 1964 adelante, trabajarán por la sustitución progresiva de la estructura tradicional por otra de tipo comunitario. Por tanto la tarea fijada empieza a desenvolverse, dentro de la democracia política y a base de apoyo popular, desde ahora mismo.

Evitar la discusión escisionista

Admitimos perfectamente que el Gobierno haya emprendido a fondo varias de las tareas de su programa: la Reforma Agraria, la organización del pueblo, la reforma educacional, la chilénización del cobre y del salitre, la participación concreta del Estado en la planificación del proceso de industrialización. Pero, también podemos admitir que hay puntos del programa del 64 que no han alcanzado desenvolvimiento suficiente. El elemento comunitario en la transformación de las relaciones de trabajo, y, por tanto, en la estructura social de las empresas, no ha sido desarrollado o probado adecuadamente. Más aun, existen zonas del poder económico tradicional que permanecen con una fuerza capaz de obstaculizar, en forma temible el impulso de nuestras aspiraciones.

Pero, a nuestro juicio, estos hechos no se superarán jamás mediante la mera discusión escisionista dentro del Partido o levantando consignas ideológicas, de factura bien conocida, contra nuestro propio gobierno. Lo natural es crear los organismos de estudios de los problemas pendientes. La Comisión Bipartita Nacional, las Comisiones Tripartitas, el Departamento Técnico, las reuniones formales entre el Presidente, los Ministros y la Directiva Nacional son los mecanismos ideados. Ellos deben funcionar. Nuestra experiencia nos muestra que las dudas sobre el programa no son graves dentro del Partido. Aun más: las que se produjeron entre la Directiva Nacional anterior y el Presidente de la República se refirieron más bien a la conveniencia de tomar una medida, a la manera de proceder; pero no a la medida misma. Algunos ejemplos aclaran la cuestión: el rechazo del Gobierno para nacionalizar la Compañía Lota Schwager no era por temor a dicha medida, sino debido a la situación financiera de esa

empresa. Igual cosa para la nacionalización de la Anglo Lautaro, la empresa salitrera. Y la divergencia entre los senadores Gumucio y Aylwin, en torno a la CAP, no se refería a que éste último, al observar el Informe de la Comisión Político-Técnica, rechazara por principio la nacionalización de ella, sino que, a su juicio, no era necesario adquirir el total de las acciones de la CAP, pues basta con comprar más del 50%.

Queremos agregar que el Informe Político-Técnico solicita la nacionalización del salitre, pero, al analizar el Proyecto del Ministro de Minería, sobre esta materia, el Consejo Nacional designó una Comisión compuesta por los camaradas, Tomás Reyes, Ignacio Palma, Vicente Sota, Juan Argandoña, Eugenio Celedón y también Sergio Molina. Ellos estudiaron el problema con el Ministro y sus asesores. Hubo una fórmula común. La Comisión dio cuenta al Consejo Nacional y fue aprobada por unanimidad. La fórmula no implica nacionalización es decir, no se ajusta literalmente al documento de la Comisión Político-Técnica, para satisfacer la posición realista y actual del Partido. ¿Podemos seguir enarbolando en abstracto el texto de dicho Informe para apoyarnos los unos a los otros? Pienso que no es legítimo hacerlo.

La actual Directiva ha solicitado en la Comisión Bipartita Nacional que se analicen varios problemas relativos a la política económica del Gobierno, entendiendo allí todas las tesis principales relativas a un avance de sentido no capitalista y a los problemas relacionados con las inversiones extranjeras. Es imposible no preocuparse de estos asuntos;

pero, en verdad, ni bajo esta Directiva ni bajo la anterior se ha podido avanzar demasiado. No es culpa de los personeros del Partido o del Gobierno. Las circunstancias del país han sido difíciles. Vivimos un período tremendo, provocado tanto por la extrema Derecha como por los partidos de Izquierda. Si dispusiéramos de un poco más de comprensión en los medios manejados por los grupos que se auto-dominan revolucionarios, —pero, que a veces parecen ser sólo anti-demócrata cristianos,— el Partido y el Gobierno podrían concertar más rápidamente las soluciones. En vez de volvernos contra nosotros mismos, en debates intelectualizados, a través de consignas, en que se niegan nuestros progresos o se ocultan nuestras fallas, la Directiva Nacional propone defender ante el pueblo la obra cumplida y estrechar filas para analizar mejor la manera como podremos seguir aplicando, ampliando y rectificando nuestro programa.

Ultimamente, como bien sabemos, la CORFO ha adquirido acciones particulares de CAP en cantidad suficiente para controlarla estatalmente.

Esto significa deshacer un grave error cometido por hombres de izquierda en años anteriores.

El hecho revela, asimismo, que el Ejecutivo no sigue ni una línea derechizante ni de neo-capitalismo. Por el contrario, analiza las circunstancias y adopta posiciones de principio cuando la realidad lo permite. Repetimos: tenemos derecho a graduar nuestros pasos. Corresponde al Partido apoyarse en estudios serios, para actuar con madurez en el momento oportuno.

V

PROBLEMA INTERNO

No queremos negar la existencia de un problema interno en nuestro Partido. La actual Mesa Directiva cree tener autoridad para afirmar que ella jamás buscó agudizarla. Todos sus miembros están libres de sospechas en cuanto a pertenecer obscadamente a algún grupo o corriente. Ninguno de nosotros hizo nada, durante 3 años y medio de Gobierno, que sig-

nificase negar su concurso a las tareas del Partido o del Gobierno. Hemos podido estar aquí o allá indiscriminadamente. Y, en los debates del Partido, nuestra conducta fue trabajar por la unidad, disminuir las controversias, buscar procedimientos de solución, orientar las resoluciones hacia adelante, no hacia el pasado.

Podemos decir más: dentro de esta posición unitaria, hemos recibido críticas. Se nos ha acusado de querer evitar definiciones necesarias. Se diría que se nos ha desafiado a aceptar dichas definiciones y que, por no hacerlo, se definiciones ha calificado como no pertenecientes a los grupos de avanzada del Partido.

Mas, no aceptamos esos desafíos, porque estamos ciertos de que las definiciones entre demócratas cristianos pueden ser reducidas a un nivel mínimo, a poco que tratemos de concentrarlas, evitemos la desfiguración que opera sobre nosotros cuando nos constituimos en fracciones permanentes, con sus líderes, con sus tesis, sus especulaciones generalmente ideológicas y no políticas. Hemos dicho muchas veces, ante Uds. mismos, delegados a la Junta, que nos falta razonar en concreto. Proyectamos la polémica, más allá de la dificultad, y terminamos siempre con "votos" políticos que nos separan a pesar de que, en la práctica, no existe razón para ello.

Este es el argumento central en cuya

virtud siempre nos pareció que el estímulo hacia la unidad es uno de nuestros deberes más fundamentales.

Los Delegados a esta Junta habrán de entender pues estas palabras dentro del mismo propósito antes señalado, pero ahora pesando con gravedad hechos recientes.

La Mesa Directiva está de acuerdo en no magnificar las cuestiones disciplinarias. Pensando que, en un Partido como el nuestro, existe lo que se llama una obediencia consentida. Nos damos el trato de camaradas, porque nos respetamos los unos a los otros. Ninguna medida disciplinaria puede sustituir este sentimiento. Pero, todos hemos aceptado también que, en última instancia, hay una solución jurídica que nos rige y que define precisamente lo que es respetarnos los unos a los otros.

Desde que asumimos nuestros cargos, tuvimos la certeza, según expresamos al comienzo de esta cuenta, que el Partido salía de una crisis en que era necesario conducirlo sin estridencias. Será inútil detallar aquí la prudencia y tolerancia

con que actuamos. Hechos graves fueron pasados por alto o, a lo más, recibieron el mero tratamiento de una conversación o de una carta amistosa. La resolución de la Juventud, una semana después de la Junta Nacional, escrita bajo el lema "Contra Viento y Marea" (o sea, contra la Junta Nacional y la autoridad del Partido), seguir avanzando, no fue blanco de sanción o reprimenda alguna. La actitud de un grupo de parlamentarios, en orden a votar en contra de una disposición del proyecto de reajustes (sobre la base de que la mayoría votaba correctamente y aseguraba la colaboración del Partido con el Gobierno), tampoco fue sancionada, por estimarse que se trataba de un problema de conciencia y porque era explicable, aunque erróneo, que se pensara en la inexistencia de una orden de Partido. La medida contra el Diputado Jaramillo, sancionada por el Tribunal de Disciplina, fue necesaria, pues de proceder de otra forma, la disciplina parlamentaria se habría visto definitivamente amenazada. La tónica general fue

siempre dejar que el espíritu de armonía prevaleciera por sí mismo. Hemos de decir que muchos camaradas no siempre nos ayudaron. Es frecuente entre nosotros recibir las medidas con amenazas de renunciadas. La no designación de un candidato parlamentario o de una autoridad local, la diferencia de criterios sobre un punto cualquiera, levanta a veces de inmediato una protesta y aún, en ocasiones, se amenaza hasta con actos físicos. No decimos que, en

ellos, no haya nunca una razón. Pero, estamos seguros de que el modo de protestar puede ser tan atentatorio a nuestra camaradería como el más desmesurado de los errores cometidos por la Dirección central. Esto nos lleva a comprobar un estado anímico entre los militantes que, de generalizarse más, significaría que ya no sería posible conducir una línea de acción nacional. Sin pretender reforzar en manera alguna la actividad de la Directiva Nacional y ha-

blando desde el punto de vista de cualquiera que ocupa un cargo de dirigente nacional, provincial o comunal, es evidente, nos parece, que los camaradas deben luchar por mantener la unidad del Partido. Ella es inseparable del reconocimiento a una jerarquía establecida y aceptada, a un procedimiento fraternal en el trato de las diferencias, y a una ausencia completa de amor propio cuando nuestra opinión o nuestros intereses personales no son mayoría.

La Juventud de aquí y de otras partes

Nos vimos en la necesidad de romper nuestra norma y aplicar una sanción grave, y con vasta repercusión pública, a nuestro camarada Enrique Correa, Vicepresidente entonces de la Juventud.

Nosotros no creemos ignorar ninguno de los antecedentes de este asunto. Bastaría remontarnos hasta el origen de la Falange Nacional para hallar analogías aparentes y entender que no ha sido fácil adoptar una medida de suspensión de su cargo al Vicepresidente de la Juventud. Algún adversario se encargó, por cierto, de hacer las deducciones, aparatosas y sensacionalistas, correspondientes. Conocemos también una buena parte del proceso de la Juventud en estos años. Fenómeno, sin duda, universal, afecta a los jóvenes de todos los países, de un signo o de otro, bajo regímenes diferentes. Digamos aún que se trata de un hecho sin denominador común, pues tan pronto revienta con caracteres izquierdistas y marxistas, en Berlín Occidental (donde la tragedia de un sistema autoritario puede ser observada con solo levantar la vista al muro), como aparece antitotalitaria en Polonia; tan pronto se muestra fanática entre los guardias Rojos de China Comunista, como se abre hacia una democratización en Checoslovaquia; tan pronto es heroica y romántica en el seguimiento de algunos líderes, Camilo Torres o Guevara, como desprecupada, egoísta o frívola, en los casos de jóvenes cultores del "colerismo" en todas sus dimensiones y gamas.

Se ha dicho que, en estos hechos, hay una especie de intuición sobre el valor que tiene la vida en las sociedades modernas. Es como si los jóvenes comprobaran que ni las naciones llamadas socialistas, ni los que están ofreciendo una prosperidad material en el mundo capitalista o reformista, son capaces de dar sentido a sus existencias. Aquí en América Latina, es fácil encontrar motivos para la rebeldía contra las instituciones establecidas. Democracias demasiado tradicionales, dictaduras odiosas, poderes socialmente corrompidos o entregados al dinero imperialista, poderes espirituales más o menos vacíos y rutinarios, partidos políticos que reproducen la lucha de intereses y de ambiciones, eso, sin duda, no es un panorama para la juventud. Basta con alzarse contra el imperialismo o contra las oligarquías para que un joven chileno se sienta jugando un papel. Basta también tener muy hondo el sentido de la codicia o de los prejuicios sociales para que otros se sientan portadores de la verdad religiosa y de la propiedad tradicionalista, todo comprendido en una sola cosa.

Nada de esto es desconocido para los demócratas cristianos que lucharon 30 años con el fin de hacer de la justicia y de la libertad dos caras de una misma medalla. Y por eso resulta desolador para un

dirigente del Partido tener que dirigirse a la Juventud de sus filas para, al parecer en nombre de los valores tradicionales, pedirles lo que ellos no quieren dar: falso respeto, falso entusiasmo, falsa espiritualidad.

Pero, no es ese el problema. Queremos aquí ser muy claros y muy objetivos. Daremos cuenta de los hechos y propondremos soluciones en nombre de la razón misma que hizo nacer y vivir al Partido Demócrata Cristiano.

He aquí los hechos:

La Junta Nacional de la Juventud, reunida para designar una nueva directiva, escuchó una cuenta de su Presidente Nacional Rodrigo Ambrosio, y aprobó un voto político. Uno y otro documento están vinculados a un amplio debate en que se advirtieron dos posiciones dominantes: los llamados "rebeldes" y los llamados "terceristas", cada uno con candidatos y posiciones propias.

Uds. saben que los votos aprobados tienen un carácter de recomendación y que el militante, propuesto por la Junta, debe ser ratificado por el Consejo. Aquí, sin embargo, se operó de otro modo. El candidato recomendado se constituyó de inmediato en dirigente nacional designado y, sin consultar siquiera con el Partido, proclamó su tesis como objetivo propio de la Juventud, independiente de la posición oficial. En el caso que nos ocupa, cada ciudadano chileno supo que la Juventud tenía posiciones en nada concordantes con el Partido y que negaban al Gobierno del camarada Frei como un Gobierno popular, demócrata cristiano, digno de ser apoyado y defendido.

¿Es aceptable ese hecho en nuestro Partido? Creemos que no. Nos parece que, en esta circunstancia los dirigentes juveniles, si son maduros políticamente, si aman a su Partido y si quieren permanecer en él, deben dar cuenta de inmediato a la Directiva Nacional, pedir el debate correspondiente y sugerir las rectificaciones internas, a fin de que el Partido las plantee en el seno de los organismos de relación con el Gobierno. No se procedió así. Por el contrario, parecía que la instrucción recibida era hacer lo más público posible la divergencia con el Partido y el Gobierno Demócrata Cristiano. Las conferencias de prensa, televisión y radios, la publicidad de los acuerdos, la audacia de las opiniones, el afán de mostrar completa independencia y exactamente como si se tratara de un partido de oposición, resultaba ostensible. La autoridad tenía que funcionar. Tomamos una medida provisional de suspensión por un lapso breve, sin perjuicio de llevar el asunto de inmediato al Consejo Nacional. El debate de este organismo, cordial y tenso al mismo tiempo, puso las cosas en

su lugar. Como consecuencia de ello, el Consejo fijó las condiciones de la disciplina y lealtad partidarias, y ratificó el nombramiento del camarada Correa cuando ellas fueron aceptadas.

Estos son los hechos. Los militantes de la Junta, sin embargo, necesitan mayores antecedentes. Es mi deber entregárselos y, para ello, debemos resumir las cuestiones fundamentales. No queremos abrigarnos en arreglos fáciles. Deseamos sinceramente que lleguemos en el próximo período, a una completa unidad interna.

Para una demostración que obligue realmente a pensar, debo citar textos. Lo haré con intención honesta. En absoluto, pretendo decir que los jóvenes afectados por mi crítica tengan un objetivo malévolo o que mis opiniones sean dogmáticas y definitivas. Más, como dirigente nacional, en estos momentos, estoy en el deber de partir de los datos objetivos de que dispongo.

Un lenguaje que era desconocido

Nos sorprendemos cuando oímos por ejemplo, que, en cuatro líneas, se destruye la doctrina, la historia, la autenticidad de los ideales, el programa de 1964, la tesis políticas de esa campaña y la heroica lucha de tantos militantes en esa misma jornada.

"La Juventud redescubre el doctrinarismo tercerista de los falangistas, su historia perpetuamente centrista, su extracción de clase media. Se redescubre también el desarrollismo del Programa del 64, el apoyo de la derecha, y el furibundo anticomunismo de la campaña, el carácter pluriclasista de la expansión social del movimiento". (R. Ambrosio, Cuenta a la Junta Nacional de la Juventud, julio).

También nos sorprendemos, cuando en vez de confiar en el Partido y en el Gobierno, se presenta a éste como un instrumento de sus adversarios:

"No sólo (la Juventud) comprende al Gobierno como un instrumento con limitaciones históricas sociales y políticas evidentes, sino como un instrumento que por la ambigüedad de su gestación puede prestarse para usos absolutamente ajenos a los principios del Partido. En esa misma medida constituye presa codiciada para una burguesía y un imperialismo que procurarán presionarlo, infiltrarlo, atrapararlo para que sea efectivamente así". (Id.)

La misma tesis es enfatizada más todavía:

"El Partido había llegado a ser el peor enemigo de los mejores amigos del Gobierno (léase el impe-

rialismo y la burguesía). Por eso, el Gobierno está obligado a tratar al Partido como su peor enemigo". (Id.)

La misma sorpresa experimentamos cuando las autoridades legítimamente designadas por Uds., y Uds. mismos, reciben este tratamiento:

"Los dirigentes "nominales" pueden tener un panorama aparentemente tranquilo. Pero las bases serán implacables cuando se trate de enjuiciar a los que desde la emboscada de Peñaflor son cómplices, encubridores y administradores de la aparente capitulación del Partido". (Id.)

¡No conocíamos ese lenguaje amenazador! Tampoco pensábamos que era posible mofarse de las tentativas de unidad, hechas con el testimonio de toda una trayectoria, modesta sin duda, pero conocida:

"No había más que dejar pasar el tiempo como otros lo hacen ahora, dedicarse a puntos de vista desde un púlpito como otros lo hacen ahora. Olvidarse del programa de desarrollo no capitalista, como otros lo hacen ahora, y entregar al Partido atado de pies y manos, como otros lo hacen ahora". (Id.)

No sabíamos que la vida interna de la comunidad demócrata cristiana era, en verdad, una lucha a muerte, donde se trata de vencer o ser vencido.

"Peñaflor nos mostró fuertes y aptos para vencer. La próxima no puede mostrarnos sino vencedores". (Id.)

Tampoco estábamos conscientes de que el gobierno que hizo la Reforma Agraria, que desarrolló el movimiento sindical, que organizó al pueblo, que extendió la educación hasta el último rincón de la Patria, que despertó el odio violento de las capas reaccionarias del país, no merece consideración alguna de parte de los camaradas del camarada Eduardo Frei:

"Si en el campo del Partido hemos logrado mantener indemnes condiciones adecuadas para acrecentar fuerzas y dar la batalla final, en el campo del Gobierno tenemos que reconocer que se ha perdido todo. Peñaflor mostró de un modo incuestionable que este Gobierno ha roto definitivamente todos los lazos de parentesco que podrían unificarlo al Partido". (Id.)

Se nos ocurre que esta declaración no es un elevado ejemplo de cómo cumplir con los acuerdos del II Consejo Nacional: apoyo al Gobierno y estrecha asociación con él...

También se nos ocurre que las perspectivas políticas de nuestro país, a partir de la Reforma Agraria, de la planificación económica y de la organización popular nos aboque fatalmente a esta encrucijada".

Una pretensión que no encaja en la realidad

Frente a la reunificación de los sectores capitalistas empezarán a surgir condiciones muy positivas para una vasta y fuerte reunificación de los diversos sectores de trabajadores y para luchas unitarias cada vez más extensas, frecuentes y potentes. El sistema social chileno entra a una fase de aguda polarización".

Como demócratas cristianos, podríamos aceptar que esa polarización se produzca como efecto de la política del Gobierno demócrata cristiano, y, por tanto, que nuestra experiencia sirva de base al agrupamiento del pueblo. No es así. Lo que se nos está diciendo es

que la política antipopular del Gobierno demócrata cristiano es la causa de dicha antítesis cada vez más violenta, y que, en ella, los aquí presentes no jugamos ningún papel activo. Somos, a lo más, una parte de aquellos que van a ser escondidos por el choque entre fuerzas que nos son ajenas y que, como Gobierno o como Partido, no podemos controlar:

"Cada vez se irán distanciando más las alternativas: dejarse arrastrar por el Gobierno en una pendiente de derechización, separándose del camino del pueblo, desnaturalizando la historia y doc-

trina del Partido, y perdiendo con seguridad lo mejor de su militancia, o desengancharse del Gobierno... El espacio intermedio donde podrían pasarse los unitarios, los intereses, los oportunistas, los magos, irá siendo reducido, pulverizado por la penetración de las contradicciones del país. En el seno del Partido, las bases tendrán que ir tomando posiciones definidas e incluíbles: a este lado o al otro".

La escisión se halla pues a nuestra puerta y nos cogerá sin que nos demos cuenta. Más allá de nuestra acción, de nuestra historia, de nuestras ideas,

de nuestra conciencia y nuestra voluntad, hay dos hechos sociales todopoderosos, la burguesía y el pueblo, el imperialismo y la revolución. Nosotros somos un grupo de hombres y mujeres vacilantes, cuyo destino es la escisión...

Esta historia que no hará la democracia cristiana y que se hace misteriosamente en la forma de los dos personajes históricos abstractos, marcha hacia una estructura social, a través de la vía no capitalista de desarrollo. Los demócratas cristianos hemos pensado siempre así, pero nunca creímos que se trata de otra cosa que el avance desde una

economía capitalista a una economía comunitaria, que no es posible identificar con las formas colectivas y autoritarias que hoy se autodenominan socialismo. Por eso, escogemos nuestros términos y procuramos designar nuestros temas con un lenguaje propio. No nos resulta convincente la frase de un joven dirigente del Mir: "El Mir sostiene la necesidad de hacer añicos el régimen y sentar las bases para la construcción del socialismo" (Punto Final Nº 53, pág. 3). Ni, a otro nivel aceptaríamos la opinión del teórico soviético Saboliov, cuando dice: "La vida social y política del pueblo que siga la vía no capitalista y

el propio Estado de democracia nacional irán adquiriendo nuevos rasgos en cada etapa de la marcha ascendente, para tomar caracteres muy distintos al final de este camino, en el momento de pasar a la vía del socialismo. (A. Saboliov, Problemas de la paz y el socialismo, Nº 54, 1963). Mas, desde dentro de nosotros mismos se nos dice ahora, como si los conceptos, la terminología y la tradición del partido no importasen nada, que el programa no capitalista "debe claramente orientarse a la difícil construcción de una economía socialista".

Lo que entendemos por nuestro PDC.

En fin, camaradas, no queremos abusar de su paciencia ni sacar de estos textos criterios definitivos. Nos parece mejor señalar lo que nosotros entendemos por nuestro Partido Demócrata Cristiano.

Somos una comunidad de hombres libres, diferentes entre sí, desiguales si se quiere, pero entendamos que todos somos camaradas de una misma causa, organizada de acuerdo a nuestras propias decisiones, en la cual no hay enemigos, ni gente que está aquí bajo la amenaza de ser derrotada, expulsada o abandonada. Tenemos la creencia plena de que, más allá de diferencias, admitimos todos una obligación ante las resoluciones del Partido.

Sabemos que existe libertad de debate, de crítica, que toda coacción nos parece un atentado contra los derechos humanos; pero, al mismo tiempo, estamos de acuerdo en que el Partido es un organismo con funciones definidas, en que la decisión tiene un carácter central y obligatorio y en que las secciones del Partido trabajan todas para servir a la causa común. Hemos forjado un partido político de vanguardia, con muchos defectos quizás, pero en caso alguno una especie de campo de Agramante, donde cada uno hace las cosas como le parece, y se siente herido en su dignidad cuando se le pide regresar al cumplimiento de los valores comunes.

Tenemos una filosofía humanista, de origen cristiano, que jamás nos detiene en nuestra lucha contra la injusticia, la inmoralidad, la opresión y, que más bien, nos identifica con ella. Pero, no creemos en una especie de designio social abstracto, invisible, que, en nombre del "movimiento" de la "historia", de las "fuerzas", de la "clase", nos haga, en verdad, juguetes de hombres de carne y hueso que mandan dictatorialmente sobre los pueblos.

Somos revolucionarios y luchamos por una sociedad verdaderamente humana. Pero no creemos que la revolución sea ajena a un concepto del hombre, al valor de la libertad, al empleo de medios democráticos y humanos aún frente al adversario.

Por eso, no nos limitamos a decir la palabra "revolución", como si fuera un símbolo mágico, sino especificamos que ella ha de ser una revolución en libertad, que nos separa de quienes reducen este último concepto a su mera voluntad dictatorial.

Admitimos ideas y experiencias ajenas a las nuestras y admiramos a los hombres que se destacan en el mundo por su coraje o sus deshumidamientos. Pero no podemos aceptar jamás por deshumanizado y reaccionaria la tesis del guerrillero Ernesto Guevara, para el cual la falta de apoyo campesino debe ser solucionada, por los revolucionarios anti-imperialistas, mediante el "terror planificado".

Somos anti-imperialistas, y apoyamos, en todas partes, la causa de la liberación de los pueblos; pero no estamos dispuestos a aceptar que se nos imponga una estrategia ajena al juicio político que nosotros pronunciamos sobre la situación chilena, ni renunciamos a nuestro derecho a señalar los métodos y las etapas de la revolución, tal como el mismo pueblo la acepta a través de elecciones libres y de una opinión pública sin limitaciones.

Aceptamos plenamente la lucha contra el capitalismo y rechazamos las teorías y las experiencias neocapitalista, desarrolladas en varios países del mundo; pero no somos partidarios de un colectivismo de Estado, de tendencia absolutista, que inevitablemente se convertiría en Estado totalitario y que está dando lugar en los propios países comunistas, a reacciones más y más vigorosas en el sentido de las ideas comunitarias propias por nuestra doctrina.

Estamos dispuestos a ser francos, claros y definidos entre nosotros mismos y a intercambiar nuestros niveles según las circunstancias y tareas que el Partido nos imponga; pero no sabemos cuál de nosotros vale más que todo el resto de los compañeros, cuál es más abnegado o más puro, cuál sea aquel a quien los hechos futuros designarán como el mejor intérprete de la realidad. Por eso, no nos calificamos con adjetivos hirientes y estamos dispuestos a pensar que la fraternidad es posible a pesar de las fallas humanas, y que debemos luchar contra nosotros mismos para no agudizar nuestras luchas ni perjudicar la causa.

Pienso, camaradas, que estas palabras nos interpretan a todos de algunas maneras. Pertenecen a nuestra vida. Se me ocurre que nada perdemos si nos atenemos a lo que ellas sugieran, sin necesidad de forzar tanto lo que somos que, a la postre, no sabemos ya cuales son los límites entre nuestro partido y otros partidos, entre nuestra experiencia y otras experiencias. No somos hijos de Viet Nam o de Cuba.

Todo lo que de valiente, noble o humano se pueda estar haciendo en esos lugares estaba de antemano en nuestras ideas. Somos hijos de esas ideas y de la experiencia que vivimos en Chile, junto a todos los que, durante muchos años, dieron su vida, su

amor, sus esperanzas, su felicidad, por fundar y sostener el movimiento demócrata cristiano chileno.

Estas son las bases, a nuestro juicio, para resolver el problema interno de nuestro Partido. No podemos actuar sino dentro de ellas.

VI

EL PARTIDO Y SUS TAREAS CONCRETAS

Así como no debemos silenciar la crítica a nuestra tarea de Gobierno, tampoco hay que callar sobre el Partido mismo.

Pensamos que hay urgentes temas internos y externos.

El esfuerzo de todas las Directivas se orienta siempre hacia la organización y la eficacia en el trabajo cotidiano por hacer. Tenemos que llamar la atención una vez más a la necesidad, en que nos encontramos, de mejorar al máximo nuestra organización.

Ella depende de nuestra calidad de militantes. Es inútil el mejor esquema organizativo si los miembros del Partido no sienten el amor por la causa, el respeto por la estructura reglamentaria, el deseo de contribuir cada uno, sin prepotencia ni ambición personal, a que todo funcione mejor. Nunca dejaremos de insistir en el hecho de que es inútil ganar victoria externa, si, a todos los niveles, los militantes no nos comprometemos con la mayor generosidad y amistad entre nosotros. Tener el sentimiento de que cada uno responde por todos en cada acto de su vida de militante es condición indispensable para formar el nuevo tipo de individuo capaz de hacer una revolución.

Esto nos traslada también a la imagen externa que los militantes estamos dando a través de nuestras actuaciones públicas. Todo Gobierno está expuesto a fallas de carácter individual. El poder, la inexperiencia, la falta de formación son sistemas para que los militantes cometan errores de orden moral en el ejercicio de sus funciones públicas. Sin carecer de la comprensión que cada caso requiere, debemos saber ser firmes en esta materia. Una revolución, decía Tomic, en el Plenario Femenino reciente, no es para la comodidad. Sin duda, buscamos que la masa del pueblo eleve sus niveles y se prepare para una vida de satisfacción material; pero, los militantes que conducen esa revolución no han de vivir para la comodidad. Cada cargo en el Partido o en el Gobierno, es un compromiso de honor que se entrega bajo responsabilidades graves. Cualquiera flaqueza, en este aspecto, será magnificada, creo ya se ha hecho, en proporción notable, precisamente porque nuestro propósito es hacer un cambio social. Se debería saber entre nosotros que ninguna situación exterior puede justificar a quien falta gravemente a sus deberes en este orden de cosas.

Desde el punto de vista exter-

no, tenemos también algunas grandes tareas.

La primera de todas es la preparación inmediata de la campaña electoral de marzo. Ella tiene que darse dentro de estrictas normas: plataforma común, lemas de propaganda comunes, solidaridad estrecha con los candidatos, apoyo esencial a la lista entera por parte de los organismos del Partido, disposición máxima de los militantes para participar y hacer triunfar a nuestros candidatos. La victoria en las urnas en 1969, asegurará nuestra situación política en el país y creará un poder decisivo para resolver los problemas del tiempo futuro por un muy largo período de años.

Otro tema es el que surge de la Ley de Juntas de Vecinos, expresión legal de la organización del pueblo. Satisfacemos con esta conquista una de las más altas aspiraciones doctrinarias del Partido. Comenzamos aquí, para Chile, una etapa cuyo valor histórico será considerable. No en vano una legislación tan importante tuvo tantos enemigos. El Partido, a través de sus militantes de comunas, tiene una función esencial. Es toda una oportunidad que se abre para participar en la revolución social de nuestros años. Sepamos ayudar al pueblo en esta tarea, sin desconocer ni degradar jamás los objetivos auténticos y puros que entraña para nosotros la empresa de hacer que el pueblo se organice a sí mismo y transforme, de esa manera, toda la estructura tradicional de la sociedad.

En general, camaradas, debemos comprender muy a fondo la idea de que nuestra revolución no se hará si nosotros no participamos en la tarea misma del pueblo.

Nuestro Partido no debe ser un mecanismo que se acerca a los ciudadanos para pedirles una adhesión política, o para sacar, directa o indirectamente, algún provecho de tipo electoral. Como en todos los grandes acontecimientos, uno advierte que es posible trabajar en beneficio de los demás. Las revoluciones se han caracterizado por crear piquetes de dirigentes que van a prestar su ayuda ahí donde se está cumpliendo una gran tarea. El dirigente político se convierte en un voluntario. ¿Cuánto espacio hay para nuestros militantes en las cosas que están surgiendo calladamente hoy de la acción demócrata cristiana en el Gobierno? Pensamos que un campesino, dedicado a hacer producir su asentamiento, o un poblador que participó en la autoconstrucción colectiva de una vivienda, no se hace la pregunta sobre si hay o no revolución. El la siente a través de sus propias manos. Allí es, nos parece, donde está la raíz para superar nuestros problemas, para rectificar nuestras faltas y para llevar hasta el final la revolución chilena.

Camaradas: concluyo esta larga exposición. He debido tratar algunos temas polémicos y quizás he omitido muchas cosas que Uds. podrán valorizar como corresponde. Quiero decir solamente que nada hay, en estas palabras, con algún significado de exclusión, de resentimiento o de escepticismo. Insisto en que nuestros problemas son reductibles a una estatura muy inferior a la que muchos creemos. Pero, algunos de ellos deben ser afrontados. Eso es inevitable. He tratado de hacerlo. Lamento cualquier acto ingrato de mi parte para algún camarada y pido excusas por ello.